

IEEBC-CG-PA107-2021

**PUNTO
DE ACUERDO**

**CONSEJO GENERAL ELECTORAL
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E.**

El suscrito Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 36, fracción II, inciso a), y 47, fracciones I y V, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; respetuosamente someto a la consideración de este órgano de dirección superior el siguiente **PUNTO DE ACUERDO** por el que se aprueba la **"REMOCIÓN DE UNA CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL XI DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA"**, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y acuerdos.

G L O S A R I O

Comisión de Reglamentos	Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal Electoral de Baja California
Consejo Distrital	Consejo Distrital Electoral XI del Instituto Estatal Electoral de Baja California
Consejo General	Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California
Constitución General	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Local	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Instituto Electoral	Instituto Estatal Electoral de Baja California
INE	Instituto Nacional Electoral
Ley Electoral	Ley Electoral del Estado de Baja California
OPL	Organismos Públicos Locales Electorales
Reglamento Distrital	Reglamento Interior de los Consejos Distritales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

ANTECEDENTES

1. Designación y ratificación de las consejeras y consejeros electorales 2018-2019. El 28 de diciembre de 2018, el *Consejo General* en su décima primera sesión extraordinaria, aprobó el Dictamen número seis de la *Comisión de Reglamentos*, relativo a la designación y ratificación de las consejeras y consejeros electorales que integraron los consejos distritales electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja California.

En ese sentido, el *Consejo Distrital*, quedó integrado de la siguiente manera:

NOMBRE	CARGO
Marycarmen Ambriz Lucio	Consejera Presidenta
Francisco Javier Suárez de la Cruz	Consejero Numerario
Tulya Méndez Mota	Consejera Numeraria
Orlando Giovanni Gándara Tiznado	Consejera Numerario
Mariana Lópezbustamante Hernández	Consejera Numeraria
Oscar Javier Navarro	Consejera Supernumerario
María Azucena Hernández Cortés	Consejera Supernumeraria

2. Inicio del proceso electoral. El 6 de diciembre de 2020, el *Consejo General* celebró sesión pública de carácter solemne para declarar el inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el cual tendrá su momento más álgido en la jornada electoral del 6 de junio de 2021, en la que habrán de elegirse la Gubernatura, los Ayuntamientos y las Diputaciones del Congreso del Estado de Baja California.

3. Sesión de instalación. El 25 de marzo de 2021, el *Consejo Distrital*, realizó su declaración formal de instalación para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, dando inicio a los trabajos de los órganos operativos del *Instituto Electoral*.

4. Informe del Consejo Distrital. Los días 17 de abril y 4 de mayo de 2021, la C. Marycarmen Ambriz Lucio, Consejera Presidenta del *Consejo Distrital*, remitió a la Secretaría Ejecutiva del *Instituto Electoral* los oficios IEEBC/CDEXI/185/2021 e IEEBC/CDEXI/231/2021, mediante el cual hizo del conocimiento de esta autoridad

electoral, el despliegue de diversas conductas desplegadas por la Consejera Electoral Numeraria **MARIANA LÓPEZBUSTAMANTE HERNÁNDEZ**, que pudieran llegar a considerarse como merecedoras de responsabilidad administrativa de conformidad con la normatividad aplicable.

5. Opinión de la Coordinación Jurídica. El 30 de abril de 2021, la Coordinación Jurídica del *Instituto Electoral*, dio respuesta al oficio IEEBC/SE/3955/2021 a través del oficio IEEBC/CJ/148/2021, en el que realizó un análisis pormenorizado de la situación específica de la funcionaria referida anteriormente y sugirió a la Secretaría Ejecutiva dar vista al Órgano Interno de Control para determinar si ha lugar a iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa.

6. Decreto provisional de suspensión temporal. El 15 de mayo de 2021, el Órgano Interno de Control inició el trámite del incidente de medidas cautelares, decretando de manera provisional la suspensión temporal de la **C. MARIANA LÓPEZBUSTAMANTE HERNÁNDEZ** en el cargo de Consejera Distrital Numeraria adscrita al Consejo Distrital XI del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

7. Decreto definitivo de suspensión temporal. El 25 de mayo de 2021, la Unidad Substanciadora-resolutora del Departamento de Control Interno emitió la resolución interlocutoria en el que decretó de manera definitiva la suspensión temporal de la **C. MARIANA LÓPEZBUSTAMANTE HERNÁNDEZ** en el cargo de Consejera Distrital Numeraria adscrita al Consejo Distrital Electoral XI del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Con base en lo anterior, y

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA

1. Que este *Consejo General* es competente para emitir el presente Punto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la remoción de una Consejera Electoral Numeraria del *Consejo Distrital*, de conformidad con el artículo 45, fracciones III y V de la *Ley Electoral*, que lo facultan para remover a las consejeras y consejeros electorales numerarios y supernumerarios de los consejos distritales electorales, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a ello, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos del *Instituto Electoral*.

II. MARCO NORMATIVO APLICABLE

"Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California".

1. Que el artículo 5, párrafos segundo y quinto, de la *Constitución Local*, indican que la renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; mientras que el proceso electoral dará inicio el primer domingo del mes de diciembre del año anterior a la elección. La jornada electoral para elecciones ordinarias deberá celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda.

2. En ese sentido, el artículo 5, Apartado B, párrafo primero de la *Constitución Local*, establece que la organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo público autónomo e independiente denominado *Instituto Electoral*, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley. En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y austeridad.

"Ley Electoral del Estado de Baja California"

3. Que, conforme con lo establecido en el artículo 35 de la *Ley Electoral*, son fines del *Instituto Electoral*, entre otros, los siguientes:

- a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado,
- b) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado, y
- c) Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político-electoral.

4. Además, el diverso 36, fracciones I, y IV, de la *Ley Electoral* establecen que, el *Instituto Electoral* tendrá su sede en la capital del Estado y ejercerá sus funciones en todo su territorio, y se integra, entre otros, por un órgano de dirección, que es el Consejo General, y por órganos operativos, que son los *Consejos Distritales*.

5. De este modo, el *Consejo General* es el órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto Electoral, y en su desempeño aplicará la perspectiva de género, según lo prevé el artículo 37 de la Ley Electoral.

6. En concordancia con lo anterior, la fracción II del artículo 46 de la *Ley Electoral* prescribe que, es atribución del *Consejo General*, entre otras, la de expedir los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones de la propia Ley.

7. Por otra parte, es atribución del Consejero Presidente vigilar y proveer lo necesario para el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo General, según se desprende lo señalado en la fracción V del artículo 47 de la Ley Electoral.

8. Asimismo, el artículo 64 de la *Ley Electoral*, define a los consejos distritales como órganos operativos y dependientes del *Consejo General*, responsables en el ámbito de su competencia, de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y cómputo de las elecciones de Gobernador, municipales y diputados, por ambos principios.

9. Bajo ese tenor, el diverso 65 de la *Ley Electoral* plasma la integración de los órganos operativos del *Instituto Electoral* al expresar que éstos se conformarán por cinco consejeras o consejeros electorales numerarios con voz y voto, un representante propietario con derecho a voz por cada uno de los partidos políticos registrados o acreditados ante el *Instituto Electoral*, una secretaria o secretario fedatario con derecho a voz en los asuntos de su competencia y dos consejeras o consejeros electorales supernumerarios exclusivamente para que suplan a las y los consejeros electorales numerarios en sus inasistencias a las diversas sesiones del *Consejo Distrital*.

10. Por otro lado, el último párrafo del artículo 72, en relación con la fracción I del diverso 73, de la *Ley Electoral*, señalan que, para su operación y funcionamiento, los consejos distritales se sujetarán a las disposiciones del *Reglamento Distrital* y cumplirán los acuerdos y resoluciones que expida el *Consejo General*.

11. En ese contexto, el artículo 84 de la *Ley Electoral* señala que, las y los integrantes de los consejos distritales del *Instituto Electoral* deberán rendir protesta de guardar y hacer guardar la *Constitución General*, la *Constitución Local* y las Leyes que de ellas emanen y cumplir con la citada ley en el desempeño de la función electoral que se les ha encomendado.

12. Bajo ese tenor, el diverso 89 de la *Ley Electoral* estatuye que las presidencias de los consejos distritales informarán oportunamente a la Secretaría Ejecutiva de las asistencias e inasistencias de las y los consejeros electorales a las sesiones, así como de la falta definitiva de los mismos.

13. Además, el último párrafo del artículo 97 de la *Ley Electoral* precisa que, las consejeras y consejeros electorales de los consejos distritales estarán sujetos al régimen de responsabilidades administrativas previsto en la ley.

14. Por su parte, el artículo 388, fracciones III, VIII y XIV, de la *Ley Electoral* señalan que, serán causas de responsabilidad para las y los servidores públicos del *Instituto Electoral*, entre otras, no cumplir o preservar los principios que rigen el funcionamiento del Instituto en el desempeño de sus labores; dejar de asistir hasta en dos ocasiones a las sesiones del consejo del que forme parte, en un periodo de treinta días, sin causa suficientemente justificada y dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo.

“Reglamento Interior de los Consejos Distritales del Instituto Estatal Electoral de Baja California”

15. Que de acuerdo con el artículo 6, párrafo 5, inciso a), del *Reglamento Distrital*, consagra que, las consejeras y consejeros electorales sólo podrán dejar de asistir a las sesiones y reuniones de trabajo por razón de enfermedad, caso fortuito o de fuerza mayor indubitable, para lo cual deben acreditar el motivo ante la presidencia del *Consejo Distrital*, o en su caso, por representar al órgano operativo en actos a los que haya sido invitado.

16. Por su parte, el artículo 6, párrafo 5, inciso b) del *Reglamento Distrital*, estipula que la Consejera o Consejero Presidente, informará por escrito a la Secretaría Ejecutiva de las asistencias e inasistencias de las Consejeras y Consejeros Electorales a las sesiones, así como de la falta definitiva de los mismos, dentro de los cinco días siguientes a que tenga conocimiento; en ese sentido, las Consejeras y Consejeros

Electores que dejen de asistir injustificadamente hasta en dos ocasiones a las sesiones del Pleno en un periodo de treinta días, serán sujetos al régimen de responsabilidades, de conformidad a lo previsto en el artículo 388 fracción VIII de la Ley.

17. En concordancia con lo anterior, el artículo 10, párrafo 1, incisos a), b) y n), del *Reglamento Distrital* estipula que, son obligaciones de las consejeras y consejeros electorales integrar el quórum de las sesiones; desempeñar su función con probidad y asistir a las reuniones de trabajo y demás análogas a las que sean convocados.

III. RAZONES QUE SUSTENTAN EL PUNTO DE ACUERDO

1. Que el presente Punto de Acuerdo encuentra su razón de ser en la necesidad de justificar el despliegue de la maquinaria legal aplicable, para que este Órgano Superior de Dirección pueda ejercer su facultad de remoción, derivadas de las conductas desplegadas por una Consejera Electoral Numeraria de uno de los órganos operativos del *Instituto Electoral*.

2. Por cuestión de método, las razones que sustentan el presente acuerdo se dividirán en cinco apartados, a saber:

- A. Metodología aplicable al caso concreto.
- B. Análisis conceptual de la remoción
- C. Facultad discrecional de remoción por parte del Consejo General.
- D. Análisis del caso concreto
- E. Conclusiones generales

A. METODOLOGÍA APLICABLE PARA DESENTAÑAR EL FONDO DEL ASUNTO

3. En cuanto a la metodología aplicable, objeto del presente apartado, es menester realizar un ejercicio analítico-deductivo, por lo que debido a la relevancia del asunto que nos ocupa, se partirá de elementos genéricos hasta llegar a la aplicación de dichos fundamentos y principios al caso concreto.

4. Una vez planteado el esquema anterior, debe precisarse que, en el apartado B, se estudiará de manera específica la figura de la remoción, con sus elementos generales y efectos, para tener un panorama claro del instrumento que pretende aplicar este *Consejo General*.

5. Por otro lado, en el apartado C se abordará la facultad discrecional de remoción con la que cuenta este órgano superior de dirección para los casos estrictamente estipulados en la *Ley Electoral*.

6. Por último, se realizará el planteamiento del caso concreto para resolver lo conducente de conformidad con la normatividad aplicable y se establecerán las consideraciones generales a manera de conclusión.

B. ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA REMOCIÓN

7. La remoción se traduce en términos generales como la declaración determinante de la revocación de un estado jurídico creado con anterioridad. De igual forma, el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española define a esta figura como la acción de cesar a un funcionario de un determinado puesto de trabajo, acordado por el órgano competente y de conformidad con la normatividad aplicable.

8. En ese sentido, debe precisarse que la remoción cuenta con diversos elementos, cuya configuración resulta indispensable para que surta efectos plenos:

- a) Que se trate de un funcionario sujeto a esta figura jurídica;
- b) Que la determinación sea dictada por un órgano competente para tal efecto y;
- c) Que dicha medida sea de acuerdo con lo establecido en las normas aplicables

9. En primer término, debe señalarse que las consejeras y consejeros electorales son designados por el *Consejo General* en virtud de un proceso de selección consistente en diversas etapas en las que se valoran múltiples habilidades y aptitudes para desempeñar el cargo referido; no obstante, una vez designados, adquieren el cúmulo de derechos y obligaciones inherentes a los funcionarios electorales que los hace sujetos a un constante escrutinio y evaluación por parte de la ciudadanía y los organismos a los que pertenecen.

10. De igual forma, debe señalarse que el *Consejo General*, como órgano superior de dirección, es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, velando por el cumplimiento irrestricto de los principios rectores de la función electoral, traducidos en elementos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género en el actuar del *Instituto Electoral*. Bajo ese tenor, los consejos distritales, al ser órganos operativos del *Instituto Electoral* y dependientes del *Consejo General*, se encuentran supeditados a sus determinaciones.

11. En concordancia con lo anterior, la normatividad que confiere al *Consejo General* la facultad de remover a los integrantes de los órganos operativos, se encuentra contenida en el artículo 46, fracción V, de la *Ley Electoral*, siempre y cuando, esa determinación provenga del voto de las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a ello.

12. Por otro lado, debe hacerse énfasis en que la remoción no es un acto privativo que implique la garantía de audiencia y el cumplimiento del debido proceso. Al respecto, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano con expediente SG-JDC-59/2020 y su acumulado SG-JDC-60/2020 al considerar que, por disposición de la normativa aplicable, para cumplir con su obligación en la organización de los comicios como función estatal, los OPL tienen servidoras y servidores públicos designados por los integrantes de sus Órganos Superiores de Dirección, conforme al procedimiento que en cada caso se establezca, velando en todo caso que la designación de las personas que ocupen dichos cargos garanticen profesionalismo en su desempeño y la capacidad para cumplir con los fines de la función electoral.

13. Como se ve, la remoción del cargo referido, no constituye un acto privativo de derechos que implique la observancia a la garantía de audiencia previa a su dictado, porque esa determinación es emitida por las y los consejeros integrantes del *Consejo General* en ejercicio de la potestad que les confiere la legislación aplicable.

14. Bajo ese tenor, debe tenerse claro que quienes ocupan los cargos de consejeras y consejeros electorales de los consejos distritales, no tienen reconocida en alguna norma jurídica un derecho subjetivo para ocupar forzosamente sus cargos, ni del derecho a la permanencia en el empleo. Por tanto, es evidente que no existe una prerrogativa que permita a la Consejera, de ser el caso, exigir una participación diversa a aquella que pueda tener en el proceso de remoción, de donde se reitera, en el mejor de los casos, sus garantías fueron respetadas, a través del análisis exhaustivo que este *Consejo General* realizó respecto a las conductas contrarias a la normativa electoral aplicable vertidas por la misma.

15. Por lo tanto, en el caso de la remoción de los integrantes de los órganos operativos del *Instituto Electoral*, no pueden invocar el derecho a la garantía de audiencia, debido a que dicha prerrogativa no está vinculada al privilegio de ocupar un cargo, sino a otro tipo de derechos, como los subjetivos públicos que tienen los procesados, por ejemplo; tratándose de actos punitivos, que en el caso no acontece.

C. FACULTAD DISCRECIONAL DE REMOCIÓN DEL CONSEJO GENERAL

16. En primer término, es necesario precisar lo que debe ser entendido por facultad discrecional; para ello, atenderemos al pronunciamiento que ha realizado la Sala Superior al respecto, dentro de la tesis jurisprudencial 1/2008 de rubro "CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL. LÍMITES CONSTITUCIONALES DE LA FACULTAD DISCRECIONAL RECONOCIDA EN LA LEY", mediante la cual establece que la facultad discrecional implica el ejercicio de una libertad de apreciación entre alternativas jurídicamente razonables; y que, derivado de ello, la determinación de la autoridad debe ser tomada con base en criterios de ponderación que por su naturaleza no se encuentran detalladas en las disposiciones normativas, sino que provienen del juicio de la propia autoridad.

17. En este contexto, podemos entender que el legislador le otorga a la autoridad administrativa la facultad de ponderación o evaluación subjetiva de determinadas circunstancias al ejercer estas atribuciones dentro de los límites legales. Ahora bien, para el caso que nos ocupa, tenemos que la *Ley Electoral*, en su artículo 46, fracción V, le ha conferido a este *Consejo General*, la atribución para designar o remover de sus cargos a las Consejeras y los Consejeros Distritales, tal y como se lee a continuación:

"Artículo 46. El *Consejo General* tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

V. Designar o remover a los consejeros electorales numerarios y supernumerarios de los Consejos Distritales Electorales, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a ello, a propuesta de la comisión respectiva, así como al Consejero Presidente de cada uno de los Consejos Distritales Electorales, de entre los propios consejeros, a propuesta del Consejero Presidente del *Consejo General*; ..."

(Énfasis añadido)

18. Debe precisarse que, el artículo en cita, no establece un procedimiento concreto de ratificación o remoción de los mencionados funcionarios; únicamente establece como requisito para que dicha ratificación o remoción sea legalmente válida, que su aprobación se realice observando la mayoría calificada, es decir, el voto de cinco de los consejeros integrantes del órgano superior de dirección.

19. En este contexto, y ante la ausencia de un procedimiento específico para la designación o remoción, podemos entender que el legislador le otorga a este *Consejo General*, la facultad de ponderación o evaluación subjetiva de dichas circunstancias dentro de los límites legales; es decir, le confiere la facultad discrecional para emitir una determinación respecto la designación o remoción de un Consejero o Consejera Distrital, con base en criterios, que al no encontrarse detallados en las disposiciones normativas, provendrán del juicio que realice este órgano superior de dirección.

20. En este tenor, el ejercicio de esta potestad, si bien implica discrecionalidad en la ponderación por parte de este *Consejo General*, la misma como ya se ha mencionado, debe ejercerse dentro de los límites que el propio ordenamiento ha fijado, y, basándose en los criterios que a juicio de esta autoridad sean pertinentes; lo anterior, con la finalidad de que dicha determinación no sea arbitraria y pueda considerarse apegada a los principios constitucionales de legalidad y certeza. Un criterio orientador lo brinda el Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, quien se ha pronunciado al respecto mediante la tesis con registro digital 2022360 de rubro y texto:

"FACULTADES DISCRECIONALES DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. SUS CARACTERÍSTICAS, LÍMITES Y CONTROL JUDICIAL CUANDO SE ENCUENTREN EN JUEGO DERECHOS FUNDAMENTALES". La discrecionalidad es una facultad atribuida a los órganos administrativos por las leyes, sin predeterminedar por completo el contenido u orientación que han de tener sus decisiones, por lo que el titular de las potestades o competencias queda habilitado para elegir, dentro de las diversas opciones decisorias que se le presentan, el medio más pertinente, valioso y eficiente para alcanzar el fin, con los mejores criterios de razonabilidad. Sin embargo, no debe entenderse como una potestad ilimitada o absoluta que permita realizar u omitir actos caprichosos que, a final de cuentas, se traducen en arbitrariedad, pues la actividad administrativa por ningún motivo puede quedar fuera o por encima del orden jurídico, en particular cuando la decisión requiere el entendimiento de conceptos que impliquen un conocimiento especializado; lo anterior, máxime que cuando haya deberes, ya sea expresos o categóricos, implícitos o indirectos, si se encuentran en juego derechos fundamentales, la discrecionalidad tiene límites y está sujeta a rendición de cuentas, esto es, al control judicial, incluso en temas especializados, debiendo allegarse los tribunales de la asesoría y saberes necesarios para decidir y asegurar la mejor protección posible.

21. En ese sentido, la sala Superior ha determinado a través de diversas resoluciones, como el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano contenido en el expediente SUP-JDC-9920-2020, que existen diversos cargos que, por su naturaleza, se encuentran sujetos a la designación y remoción de órganos de naturaleza superior, sin transgredir el derecho de las y los ciudadanos a ocupar cargos públicos contenido en el artículo 35 de la *Constitución General*.

22. De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 132/2020, ha determinado que la facultad de designación y remoción de diversos cargos al interior de los OPL, pretende evitar injerencias externas en aras de preservar los principios de autonomía e independencia.

23. Asimismo, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, se ha pronunciado acerca de la facultad discrecional del *Consejo General*, a través del recurso de inconformidad RI-01/2019 y acumulados, mediante el cual confirmó el Dictamen Seis de la *Comisión de Reglamentos* relativo a la "DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA", aprobado por el *Consejo General*, al considerar que este cuenta con una facultad discrecional plena para designar, o en su caso, ratificar a los consejeros y consejeras electorales, pues esta se configura de manera implícita mediante el estricto apego de la autoridad electoral a las reglas del procedimiento establecidas en la normatividad aplicable, por lo que aplicando este criterio al caso concreto, es claro que,

si cuenta con la facultad de designar y ratificar a los integrantes de los órganos operativos del *Instituto Electoral*, en mayor medida cuenta con la atribución de remover a quienes formen parte de dichos consejos siempre y cuando se vulneren los principios rectores de la función electoral.

24. Robusteciendo el argumento anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado al resolver el recurso de apelación radicado bajo el expediente SUP-RAP-793/2017, que uno de los motivos por los que el legislador confirió al Consejo General del *INE*, la facultad de designar y remover a las y los consejeros electorales de los *OPL*, fue para lograr la autonomía de dichos organismos en el funcionamiento e independencia de sus decisiones. De igual manera, la legislación contempló dos mecanismos para fincar responsabilidades a los consejeros de los *OPL*: a) El procedimiento de remoción, a cargo del órgano superior de dirección del *INE*, y la sujeción al régimen de responsabilidades de los servidores públicos a cargo de órganos especializados para tal efecto.

25. En ese sentido, y realizando un ejercicio hermenéutico de carácter sistemático y funcional, se advierte que el legislador local confirió al *Consejo General* únicamente la facultad de remoción de los consejeros electorales de sus órganos operativos, delegando la facultad de fincar responsabilidades administrativas a otras entidades de naturaleza distinta.

D. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

26. En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, los trabajos de los órganos operativos del *Instituto Electoral* son indispensables para el desarrollo integral de las diversas etapas que lo conforman, en ese sentido, es fundamental garantizar una integración adecuada que se traduzca en el funcionamiento pleno de los consejos distritales.

27. En contraposición con lo anterior, una conformación incompleta o viciada, con integrantes que se conduzcan sin apego a los principios rectores de la función electoral, representa un gran riesgo para la vida democrática de la sociedad.

28. Por lo tanto, resulta indispensable la cooperación y la comunicación entre los órganos operativos y los demás entes que integran el *Instituto Electoral*, pues es obligación de quien presida algún consejo distrital, informar a la Secretaría Ejecutiva de las asistencias e inasistencias de las y los consejeros electorales a las sesiones, así como de la falta definitiva de los mismos.

29. En esa directriz, es que la C. Marycarmen Ambriz Lucio, Consejera Presidenta del *Consejo Distrital*, dio vista a la Secretaría Ejecutiva a través de los oficios IEEBC/CDEXI/1485/2021 e IEEBC/CDEXI/231/2021, de diversas conductas desplegadas por la Consejera Electoral Numeraria **MARIANA LÓPEZBUSTAMANTE HERNÁNDEZ**, consistentes en lo siguiente:

- a) Su inasistencia a las sesiones celebradas por ese *Consejo Distrital* en fechas 15, 17 y 27 de abril, sin que mediara justificación para ello; y
- b) Que no se contó con su participación en alguna de las actividades relacionadas con el proceso de selección de supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores electorales locales.

30. Ante tal situación, la Secretaría Ejecutiva dio vista a diversas instancias entre las que destaca el Órgano Interno de Control para que iniciara la investigación conducente; sin que esto represente un obstáculo para que este *Consejo General* pueda analizar el caso y determinar lo que conforme a derecho proceda.

31. Bajo ese tenor, resulta necesario analizar los rubros a los que hace referencia la presidencia del *Consejo Distrital*, para determinar si la Consejera Electoral Numeraria **MARIANA LÓPEZBUSTAMANTE HERNÁNDEZ**, vulneró con sus acciones u omisiones, los principios rectores de la función electoral.

a) Inasistencia a las sesiones del Consejo Distrital

32. La asistencia a las sesiones, se traduce en un elemento *sine qua non* del funcionamiento pleno de los consejos distritales, pues a través de ella se garantiza el quórum, que a su vez permite el desarrollo de las propias sesiones y la adopción válida de los acuerdos tomados en dichas reuniones plenarias.

33. En el caso que nos ocupa, la inasistencia de la Consejera Electoral Numeraria no se limitó a los días 15, 17 y 27 de abril del presente año, como inicialmente informó la presidencia del *Consejo Distrital*, sino que se prolongó hasta el momento en que se decretó la suspensión provisional por el Órgano Interno de Control del

Instituto Electoral, pues de la revisión de las listas de asistencia remitidas por el *Consejo Distrital* y que pueden ser consultadas en el apartado referente a los consejos distritales de la página www.ieebc.mx, así como de los oficios IEEBC/CDEXI/256/2021 e IEEBC/CDEXI/299/2021, puede advertirse que la **C. MARIANA LÓPEZBUSTAMANTE HERNÁNDEZ** tampoco asistió a las sesiones celebradas los días 29 de abril y 6, 11 y 14 de mayo de 2021, transgrediendo claramente lo dispuesto en el artículo 6, párrafo 5, inciso b) que dispone que las consejeras y consejeros electorales que dejen de asistir injustificadamente hasta en dos ocasiones a las sesiones del pleno en un periodo de treinta días, serán sujetos al régimen de responsabilidades, de conformidad con lo previsto en el artículo 388, fracción VIII, de la *Ley Electoral*.

c) Falta de participación en diversas actividades del Consejo Distrital

34. Si bien las sesiones ordinarias y extraordinarias durante este proceso electoral, se han desarrollado de manera virtual o mixta derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), los trabajos de los consejos distritales no se circunscriben únicamente a las sesiones respectivas, pues existen múltiples actividades que, por su naturaleza, deben desahogarse de manera presencial como las relativas al proceso de selección de supervisoras y supervisores electorales en sus diversas convocatorias mediante la aplicación de los exámenes correspondientes; los diversos cursos en línea y el registro de solicitudes de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa; precisado lo anterior, debe asentarse que la Consejera Electoral Numeraria **MARIANA LÓPEZBUSTAMANTE HERNÁNDEZ** no asistió a dichos trabajos, de acuerdo con lo referido por la presidencia del *Consejo Distrital* en los oficios IEEBC/CDEXI/185/2021 e IEEBC/CDEXI/230/2021, así como el oficio IEEBC/CDEXI/231/2021, signado por las y los integrantes de dicho órgano operativo en el que manifestaron su inconformidad con relación al desempeño de la Consejera Electoral Numeraria referida.

E. CONCLUSIONES GENERALES

35. Una vez precisado el contexto en el que se circunscribe el caso concreto, es procedente realizar las siguientes consideraciones:

- a) La remoción constituye una figura procedente cuando es dictada por un órgano competente para tal efecto, dicha medida se encuentra prevista en la normatividad aplicable al caso concreto y el destinatario de la norma, por la naturaleza de su cargo, se encuentre sujeto a esta figura jurídica;

- b) Las y los integrantes de los consejos distritales del *Instituto Electoral*, al depender del *Consejo General* para su funcionamiento y operatividad, se encuentran sujetos al régimen de designación, ratificación y en su caso, remoción por parte del órgano superior de dirección;
- c) El *Consejo General* cuenta con una facultad discrecional de remoción en el caso de que las y los integrantes de los órganos operativos se aparten de las obligaciones que les impone el ordenamiento, en ejercicio de su función de garante de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, de las cuales derivan los principios rectores de la función electoral;
- d) En el caso concreto, la Consejera Electoral Numeraria aludida incurrió en notorio descuido en el desempeño de las funciones o labores encomendadas, incumpliendo con la protesta de desempeñar a cabalidad la función electoral; por lo tanto, lo conducente es removerla del cargo antes referido, y
- e) Finalmente, debe señalarse que, el presente Punto de Acuerdo se encuentra debidamente fundado y motivado, en estricto apego al principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la *Constitución General*, debido a que, una vez analizado el caso concreto, se invocaron los preceptos aplicables a éste, y además se expresaron las razones que llevaron a esta autoridad electoral a concebir la determinación planteada en este documento. Un criterio que enmarca el dicho anterior lo constituye la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con registro digital 203143, de rubro y texto: **FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN**. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, este *Consejo General* emite los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se remueve a la C. Mariana Lópezbustamante Hernández del cargo de Consejera Electoral Numeraria, adscrita al Consejo Distrital Electoral XI del Instituto Estatal Electoral de Baja California, de conformidad con el contenido del considerando III del presente Punto de Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique el contenido del presente Punto de Acuerdo de manera personal a la C. Mariana Lópezbustamante Hernández, y mediante oficio al Consejo Distrital Electoral XI, así como al Departamento de Control Interno, ambos del *Instituto Electoral*, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. El presente Punto de Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el *Consejo General*.

CUARTO. Publíquese el presente Punto de Acuerdo en el portal de internet institucional, dentro del término señalado en el artículo 22, párrafo cuarto, del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Dado en sesión virtual del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a los cinco días del mes de junio del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

"Por la autonomía e independencia
de los organismos electorales"

C. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ MORALES
CONSEJERO PRESIDENTE

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DE
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

